

La Motosierra en la Universidad y el Sistema Científico Argentino: un análisis de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei

Hernán Ouviaña^{I, II}Gabriela Vilariño^{II}Laura Rodríguez^{II}^IUniversidad de Buenos Aires (UBA), Provincia de Buenos Aires – Argentina^{II}Universidad Nacional de Luján (UNLu), Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Resumen

El artículo realiza un análisis de coyuntura de las políticas de ajuste presupuestario sobre las universidades públicas y el sistema científico-tecnológico implementadas por el Gobierno de Javier Milei en Argentina (desde diciembre de 2023). A partir de una caracterización de la evolución reciente de la inversión pública, se describen los ejes centrales del recorte presupuestario, y sus consecuencias en términos de subfinanciamiento y de empeoramiento de las condiciones laborales de las y los docentes e investigadores universitarios y de las iniciativas de resistencia y de lucha desplegadas por las organizaciones sindicales del ámbito universitario junto a otros actores significativos. Se analizan estos procesos en el marco de la "oleada global" de auge de las ultraderechas, entendida como un proyecto de restauración del poder de clase que busca superar la crisis orgánica vivida en la región y a nivel mundial. En este trabajo realizamos un recorrido por la bibliografía actualizada sobre las ultraderechas contemporáneas, una recuperación de datos cuantitativos sobre las universidades argentinas y su financiamiento, y usamos fuentes periodísticas y documentales sindicales para dar cuenta del conflicto universitario.

Palabras clave: **Javier Milei. Universidad Pública. Sistema Científico. Financiamiento. Protesta.**

The Chainsaw in the University and the Argentine Scientific System: an analysis of the adjustment policies of Javier Milei's government

Abstract

The paper provides a conjunctural analysis of the budgetary adjustment policies affecting public universities and the scientific-technological system implemented by the government of Javier Milei in Argentina (since December 2023). Based on a characterization of the recent evolution of public investment, the central axes of the budgetary cuts and their consequences in terms of underfunding and worsening labor conditions for university teachers and researchers are described. The initiatives of resistance and struggle deployed by university trade union organizations, along with other significant actors, are also detailed. These processes are analyzed within the framework of the "global wave" of the rise of the far-right, understood as a project to restore class power that seeks to overcome the organic crisis experienced in the region and worldwide. This work involves a review of the updated bibliography on contemporary far-right movements, a recovery of quantitative data on

Argentine universities and their funding, and the use of journalistic and syndical documentary sources to account for the university conflict.

Keywords: **Javier Milei. Public University. Scientific System. Funding. Protest.**

A Motosserra na Universidade e o Sistema Científico Argentino: uma análise das políticas de ajuste do governo de Javier Milei

Resumo

O artigo faz uma análise da conjuntura das políticas de ajuste orçamentário sobre as universidades públicas e o sistema científico-tecnológico implementadas pelo governo de Javier Milei na Argentina (a partir de dezembro de 2023). A partir de uma caracterização da evolução recente do investimento público, descrevem-se os eixos centrais do corte orçamentário e suas consequências em termos de subfinanciamento e piora das condições de trabalho dos professores e pesquisadores universitários, bem como as iniciativas de resistência e luta desenvolvidas pelos sindicatos do meio universitário em conjunto com outros atores significativos. Esses processos são analisados no contexto da “onda global” de ascensão da extrema direita, entendida como um projeto de restauração do poder de classe que busca superar a crise orgânica vivida na região e em nível mundial. Neste artigo, revisamos a literatura contemporânea sobre os atuais movimentos de extrema direita, recuperamos dados quantitativos sobre universidades argentinas e seu financiamento e usamos fontes jornalísticas e fontes documentais sindicais para descrever o conflito universitário.

Palavras-chave: **Javier Milei. Universidade Pública. Sistema Científico. Financiamento. Protesto.**

Introducción

El artículo se propone reconstruir el proyecto económico y político para la educación superior que viene impulsando en Argentina el gobierno de Javier Milei desde su asunción hace un año y medio. Su avance se entiende en consonancia con el fenómeno global de ataque de las ultraderechas a las instituciones universitarias públicas como parte de la embestida al pensamiento crítico, que se expresa como ahogo financiero y persecución ideológica. Sobre la base de información secundaria referida a la evolución y los cambios producidos en el presupuesto destinado a la Universidades Nacionales, se da cuenta del ajuste en curso y se señalan sus efectos principales en términos de desfinanciamiento de las instituciones y del empeoramiento de las condiciones laborales de las y los docentes e investigadores universitarios, reconstruyendo, desde fuentes periodísticas y documentos elaborados por los propios actores gremiales, las iniciativas de resistencia y de lucha que han desplegado las organizaciones sindicales del ámbito universitario frente a estas políticas. Una de nuestras principales hipótesis es que estamos en presencia de una contraofensiva del capital para profundizar la reestructuración de la sociedad y el Estado, que busca reconfigurar las relaciones de fuerza y generar un cierre por arriba, en forma violenta, del proceso de luchas y movilizaciones populares que integraron el ciclo de impugnación al neoliberalismo en Argentina y América Latina.

Las ultraderechas a nivel global y la irrupción de Javier Milei en Argentina

Desde hace al menos una década, diversos partidos y organizaciones de ultraderecha han logrado concitar la atención pública, instalarse con fuerza como alternativa de poder e

incluso acceder al gobierno por la vía electoral en distintas regiones del mundo. No es algo novedoso la existencia de plataformas e instancias de corte ultraderechista y hasta neofascistas en otros períodos históricos. Tal como reconstruye Cas Mudde (2021, p. 42), es posible hablar de al menos tres “ciclos” previos en los que las ultraderechas tuvieron presencia y actuaron en la arena política¹. Además de su considerable heterogeneidad, lo que caracteriza a esta cuarta “ola” surgida en los primeros años del siglo XXI es, sobre todo, su capacidad de “desmarginalización”, a tal punto que algunos de los mayores países del planeta han tenido recientemente o tienen en la actualidad como jefe de Estado electo democráticamente, a un líder de ultraderecha.

Debido a los rasgos distintivos, así como de las diferencias entre las ultraderechas del norte global y de regiones periféricas como América Latina, no hay acuerdo pleno en torno a cómo denominarlas². Existe consenso en hablar de una nueva “oleada global” con ciertos rasgos comunes, que hacen parte de una contraofensiva a escala mundial, que aspira a infligir una derrota estratégica a la clase trabajadora y los sectores populares en general. Se trata por tanto de un fenómeno planetario, una “ola reaccionaria” de carácter mundial vinculada a factores en crisis y horizontes de reconfiguración del sistema-mundo capitalista, pero que, al mismo tiempo, debe leerse a partir de ciertas especificidades y originalidad de cada proceso socio-político, en función de los contextos y realidades nacionales en los que se inscribe.

Partimos de asumir que, por un lado, existe un contexto global de crisis *del* capitalismo como tal, y no sólo *dentro* de él, que se remonta a los años 1970. Precisamente, la reestructuración neoliberal fue el intento de superación desde una perspectiva regresiva e intra-sistémica, que buscó relanzar el proceso de acumulación capitalista sobre nuevas bases. Como respuesta frente a esta crisis, cobra fuerza la prédica privatista y neoconservadora a partir de los años 1980 y comienzos de la década posterior a nivel global. Tal como plantea David Harvey (2015), el proyecto neoliberal se orientó a *restaurar un poder de clase* parcialmente perdido en el período previo, lo que implicaba modificar la correlación de fuerzas en un sentido integral.

En Argentina, la cruenta dictadura cívico-militar sentó las bases del disciplinamiento social, proceso que terminará de consumarse con el shock psicológico de la hiperinflación vivida a finales de la década de 1980 y comienzos de 1990. El terrorismo político y el económico, cada uno con sus particularidades, daban forma así al nuevo patrón de acumulación y dominación que se consolidaría en los primeros años del gobierno de Carlos Menem, propiciando la fragmentación de la clase trabajadora y la rotura de los lazos de solidaridad entre los diversos sectores de la sociedad civil.

La reestructuración neoliberal tuvo como contracara, a nivel continental, una creciente resistencia y oposición por parte de comunidades, organizaciones y movimientos sociales, dando lugar a lo que se ha caracterizado como Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en

¹ Mudde (2021, p. 39) distingue tres olas de ultraderecha política en la Europa occidental de posguerra: 1) Neofascismo (1945-1955); 2) Populismo de derecha (1955-1980), 3) Derecha radical (1980-2000). Por su parte, esta cuarta ola que emerge en el siglo XXI se ha “beneficiado electoral y políticamente por tres ‘crisis’: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (y otros posteriores), la Gran Recesión de 2008 y la ‘crisis de los refugiados’ de 2015”.

² Ello implica que si en ciertos casos se ha apelado al clásico concepto de *fascismo* (Stanley, 2018; Feierstein, 2019; Melo, 2020), en otros se opta por el término de *neofascismo* (Guamán et al., 2019), *posfascismo* (Traverso, 2018) o *extremas derechas 2.0* (Forti, 2021).

América Latina (CINAL) (Ouviña; Thwaites Rey, 2019). Las rebeliones, repertorios de protesta y luchas populares de carácter antineoliberal apalancaron los triunfos electorales y/o la consolidación de los gobiernos denominados “progresistas” en la región (inaugurados con el triunfo de Hugo Chávez en 1998, al que le sucedieron, entre otros: Lula da Silva en 2002, Néstor Kirchner en 2003 y Evo Morales en 2004). Mientras que algunos dotaron de sentido a estos gobiernos y garantizaron su permanencia, otros se mantuvieron distantes y generaron dinámicas de acción directa y agendas propias, que en no pocos casos colisionaron con – o fueron rechazadas por – los gobiernos “progresistas”.

Aunque no podemos aquí dar cuenta de los matices y complejidades, así como de las luces y sombras de estos gobiernos, lo cierto es que cada vez más ellos fueron agudizando el carácter de lo que Antonio Gramsci (1999) denominó “pequeña política”. Es decir, a aquella práctica que se encapsula en el día a día y asume con resignación el orden dominante, intentando adecuarse a él más que enfrentarlo. Lejos de trastocar las estructuras económico-sociales e institucionales para aspirar a crear nuevas relaciones, estos gobiernos tendieron a conservarlas y defenderlas, haciendo de la intriga entre figuras individuales y la disputa electoral, un pivote central de su accionar, acotado a consolidarse al interior de un equilibrio de fuerzas y un poder de clase ya constituido, lo que terminó redundando en un envalentonamiento, capacidad de iniciativa e irradiación de fuerzas neoconservadoras y de ultraderecha.

La crisis global de 2008 y sus secuelas en la región a partir de 2011 con la caída de los precios de los *commodities* tendieron a exacerbar los problemas socioeconómicos acumulados, así como la concentración y extranjerización empresarial, lo que trajo consigo no solamente protestas y descontento de vastos sectores populares perjudicados por esta coyuntura; sino también, como respuesta y contraofensiva de las clases dominantes, ajustes presupuestarios, niveles cada vez más altos de violencia y extractivismo recargado, siendo la inestabilidad hegemónica un rasgo invariante en casi toda la región. Esta conjunción de malestares, frustraciones y asimetrías pavimentó el camino para el crecimiento acelerado de propuestas de ultraderecha.

La pandemia y la posterior profundización de la crisis sistémica mundial generó un reforzamiento de las aristas represivas y judiciales de los Estados, combinado con una reactivación e intensificación de algunos núcleos de sentido común que abrevan en valores tradicionales ligados a la defensa de la familia, el orden y la propiedad privada. A su vez, el contexto de incertidumbre y precariedad socio-económica, abona a que las clases dominantes y el imperialismo vean como más viable el fortalecimiento de esta opción.

Si bien consideramos que el Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina aún continúa en pie (en tanto no cabe restringirlo a los vaivenes gubernamentales), lo cierto es que viene sufriendo un violento intento de cierre o clausura en el último tiempo, a partir del despliegue de un estatismo autoritario de contornos inéditos y que parece consolidarse como tendencia regional e inclusive contar con cierto consenso societal en algunos países, de la mano de proyectos de corte abiertamente ultraderechistas que han logrado acceder al gobierno o concitan un caudal nada despreciable de votos en términos electorales.

El triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de noviembre de 2023 con el 56% de los votos, resultó un cimbronazo a nivel nacional e internacional, aunque a decir verdad su acelerada irrupción es simétrica a la profundidad de esta crisis. Una figura ajena a

las estructuras políticas tradicionales y con un discurso abiertamente derechista y ultraliberal, logró derrotar al candidato del peronismo Sergio Massa (en este entonces Ministro de Economía de Alberto Fernández), así como concitar el apoyo en segunda vuelta del PRO (Proyecto Republicano, partido de derecha surgido tras la crisis vivida en 2001, y cuyo mayor líder es el ex presidente Mauricio Macri), disputando el electorado en territorios y sectores en los que históricamente las derechas no tenían receptividad ni arraigo.

El programa propuesto en plena campaña por su flamante partido La Libertad Avanza reivindicaba de manera insistente un ideario y un conjunto de políticas definidas explícitamente como neoliberales, e incluso “ultraliberales”, a tal punto que el símbolo que logró sintetizar su programa fue la motosierra, que Milei exhibió en actos públicos en medio de una diatriba tan radical como estridente contra lo que caracterizó como la “casta”.

A la combinación de una inflación persistente, precariedad y niveles escandalosos de desigualdad, corrupción y desprestigio de buena parte de la élite política, se le sumaron las expectativas frustradas de un sector mayoritario de la población ante el fracaso de los dos proyectos de recomposición y narrativas de cambio que surgieron tras la crisis de hegemonía de 2001: por un lado, el kirchnerismo como variante nacional-popular y progresista del peronismo; por el otro, el macrismo en tanto derecha renovada y gradualista. Todo ello abonó a un creciente malestar de los sectores populares, intensificado por la experiencia pandémica, donde en particular las juventudes se vieron forzadas al confinamiento y sus modalidades de vinculación se replegaron hacia el ámbito privado, tornándose virtuales y siendo mediadas casi de manera exclusiva por las redes digitales.

Este complejo escenario allanó el terreno para que la ultraderecha pudiese apelar a un significativo clave como el de “libertad” y disputar el sentido común en favor de la inevitabilidad de un proyecto urgente y radical de reformas estructurales, que incluyera la restauración del “orden” y de ciertas jerarquías que se percibían como vulneradas, la reducción drástica del gasto público y un estricto ajuste fiscal. Haciendo alarde de ser un *outsider* de la política, con un discurso histriónico e incendiario que lo tornaba “auténtico” y “empático” frente al hastío y la decepción de una parte importante de la sociedad, a los pocos días del triunfo Milei llegó a expresar: “Hoy comienza la reconstrucción de Argentina, hoy comienza el fin de la decadencia. Se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente” (El País, 20/11/23).

Desde un comienzo la retórica de Milei como presidente fue de abierta denostación contra el Estado, llegando a definirlo incluso como “una organización criminal”, a la que hay que horadar desde adentro cual “topo”. Por ello hizo pública la propuesta del Decreto de Necesidad y Urgencia Número 70/2023, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” y conocida como “Ley Bases”, que envió al Congreso Nacional para su aprobación a pocas semanas de la asunción, y cuyo contenido se fue modificando al calor de las negociaciones y críticas formuladas por la oposición. La aprobación del articulado, que al comienzo contemplaba la modificación de más de 300 leyes, involucró el recorte y la reformulación de partes sustanciales del proyecto original en aras de su sanción definitiva, publicándose el 8 de julio de 2024 en el Boletín Oficial la Ley Número 27.742. Más allá de sufrir estas transformaciones, ella ha implicado la puesta en práctica de un plan de ajuste presupuestario, reestructuración organizativa y despidos en la administración pública casi sin precedentes.

El ajuste estructural en la universidad y el sistema científico

Analizar la política universitaria de La Libertad Avanza y su impacto sobre las universidades públicas requiere comprender los rasgos centrales del sector universitario argentino y su desarrollo reciente. Dicho sector, conformado por instituciones públicas y privadas, se expandió fuertemente desde la recuperación de la democracia a principios de los años 1980. El crecimiento del sistema universitario se aceleró en la década de 1990 y en la segunda de los 2000, tanto en términos de la cantidad de instituciones, como de estudiantes. En 2023, asistían al nivel universitario algo más de 2 millones y medio de estudiantes de pregrado y grado, 22% cursando en 69 instituciones universitarias privadas; el 78% restante asistía a 64 instituciones dependientes del Estado Nacional, y a 8 de jurisdicción provinciales.

La inversión sectorial ha transitado por diversas fases de crecimiento y retracción, con importantes variaciones interanuales, fuertemente relacionadas con el ciclo económico y político entre gobiernos de distinto signo, pero también dentro de cada gestión gubernamental. Los mecanismos de financiamiento fueron profundamente reestructurados en la década de 1990, etapa en la que el gobierno de Menem (1989-1999) realizó una amplia reforma educativa, parte de la reestructuración neoliberal de la sociedad, la economía y la política argentina.

Al igual que en varios países de América Latina, la reforma universitaria de esa década tuvo como estrategia central la transformación de los mecanismos de financiamiento. En Argentina, el presupuesto universitario para el conjunto de las Universidades Nacionales es parte del presupuesto del Estado Nacional que anualmente se aprueba por ley del Congreso Nacional, y compone el rubro de mayor peso en el gasto de la cartera educativa – entre algo más del 50% a más del 70%, según el año considerado en la serie 1989-2022 (García de Fanelli, 1997; García de Fanelli; Broto, 2023). Su característica persistente es su rigidez: entre el 80 y 90% del presupuesto se destina al pago de salarios. El discurso oficial del menemismo cuestionó la gratuidad y los criterios tradicionales de asignación presupuestaria a las universidades nacionales, históricamente basado en negociaciones con base en el presupuesto del año anterior.

Las contradicciones del modelo neoliberal desembocaron en 2001 en una profunda crisis orgánica – crisis de dominación y de la moneda. El fin del llamado “régimen de convertibilidad”,³ el default y posterior devaluación, agravaron las deterioradas condiciones de vida y destruyeron el tejido productivo, con el consecuente aumento brutal de la pobreza e indigencia, el desempleo y la informalidad laboral. La inversión en el sector universitario retrocedió a los niveles de fines de 1980.

La recomposición posterior durante el Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina, encarnado en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue acompañada por transformaciones de la política sectorial, pero manteniendo la arquitectura legal y las herramientas de política establecidas en la década de los noventa; la Ley de Educación Superior (1995) fue reformada parcialmente en 2015. No obstante, en el gobierno de Néstor Kirchner fueron sancionadas varias leyes que atendieron la demanda social de

³ Entre 1991 y 2002 rigió en Argentina una relación cambiaria fija que hacía equivaler 1 dólar estadounidense a 1 peso argentino, llamada coloquialmente el régimen del “uno a uno”.

desmantelar la reforma educativa neoliberal, entre las cuales se destacan la Ley de Financiamiento Educativo (2005), y la Ley de Educación Nacional (2006).

En 2005, la inversión consolidada Nación/provincias en educación era del 3.9%, mayoritariamente provincial. El Estado Nacional fue incrementando el presupuesto asignado a distintos programas educativos dirigidos a la educación básica y superior no universitaria, complementando la inversión principal de las jurisdicciones. Sumada a la inversión en el sistema universitario, el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional llegó en 2015 a su máximo nivel (1,59% del PBI), sufriendo posteriormente un descenso continuado hasta 2019 (1,08%), para recuperarse en los años de la pandemia (1,48% del PBI en 2023) (Curcio *et al.*, 2024). En lo atinente a las universidades, los gobiernos Kirchner implementaron una política sensible a las necesidades y demandas de distintos actores sectoriales, a la implementación de programas consensuados, integrados a un proyecto político que pretendía “el crecimiento con inclusión social”, la reconstrucción del tejido productivo y la afirmación de “derechos”. Entre 2003 y 2010, las transferencias por Programas especiales (por fuera del financiamiento regular) representaron entre el 4 y el 6% de las transferencias totales del Ministerio de Educación a las Universidades Nacionales (Broto, 2012), y en 2015, el 15% (Cetrángolo; Curcio, 2017). Mostrándose como una herramienta flexible y en cierto grado discrecional de financiamiento adicional, adaptable a los ciclos económicos y a las negociaciones del momento político, continuó siendo usada por los gobiernos posteriores. Comprendió programas de mejora de la calidad de la enseñanza, la ampliación de cargos docentes, equipamiento, fortalecimiento de la relación entre Universidades Nacionales y sector productivo y becas estudiantiles. Favorecido por el ciclo de las *commodities* hasta 2012, el presupuesto universitario pasó de representar el 0,53% del PBI en 2000, 0,87% en 2010, y 1% en 2012, manteniendo más o menos estable su peso en el gasto de la Administración Nacional (entre 3% y 4). El presupuesto continuó siendo sumamente rígido (el gasto salarial representa entre el 80% y el 90% del gasto, según los años), incluso con el crecimiento moderado de las inversiones de capital y la creación de instituciones, mayormente localizadas en el Conurbano Bonaerense (Fernández Lamarra *et al.*, 2018). Desde 2012, la inversión se tornó inestable e inició una fase descendente. Así, en el gobierno de Macri el porcentaje del PBI asignado a las Universidades Nacionales pasó de 0,84% en 2017 a 0,69% en 2019; y durante el gobierno de A. Fernández (2019-2023), en contexto de pandemia y con importantes oscilaciones, en 2022 el Estado Nacional había invertido sólo 0,68% del PBI en el sistema universitario público, recuperando un poco en 2023 (0,72%) (IEC/CONADU, junio 2025).

Con las mencionadas limitaciones y altibajos, desde 1980, el gasto en educación de Nación y provincias creció en términos reales, acompañando la expansión sostenida de los niveles de escolarización de la población; según cálculos de Morduchowicz, Sáenz Guillén, L. et Vollman (2024), tanto la matrícula como el financiamiento del nivel superior (universitario y no universitario) crecieron a tasas mayores que el destinado a la educación básica, diferencia más aguda a partir de 2006.

La presión expansiva y la persistencia del peso del componente salarial en el presupuesto universitario derivó en que el crecimiento del presupuesto a lo largo de estas décadas no se viera reflejado en un aumento del gasto por alumno, que se mantuvo relativamente estancado desde 2012. De igual modo, diversas investigaciones evidencian, con distintos métodos de cálculo, la fragilidad de los salarios docentes frente a la inflación

endémica desde hace más de cuarenta años. El deterioro salarial afecta a un cuerpo docente fragmentado en términos de cargos y dedicaciones, pues las Universidades Nacionales no modificaron en cuatro décadas la baja proporción de docentes-investigadores/as con dedicaciones exclusivas (sólo el 10% del total de docentes tiene cargos full-time) y más altas categorías profesoriales (sólo 11,5% son profesores titulares o asociados): el grueso de las/los docentes universitarios revistan en cargos de auxiliares con dedicaciones simples (10 horas semanales); al mismo tiempo, persiste en ciertas instituciones y carreras – en especial aquellas ligadas a profesiones liberales – la práctica de la docencia ad-honorem y los contratos precarios.

La política de La Libertad Avanza para las universidades públicas, la ciencia y la tecnología

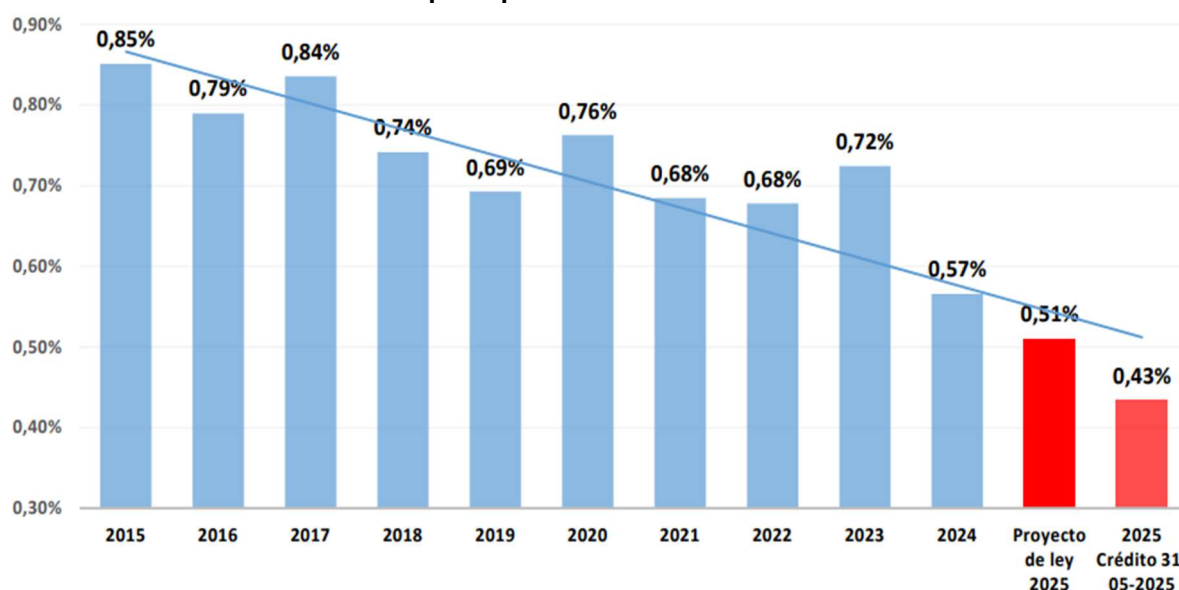
El eje central de la política de La Libertad Avanza es el desguace y reducción de la intervención del Estado Nacional en materia educativa.⁴ En lo que respecta a las Universidades Nacionales, su agenda pretendió orientar el debate público acusándolas de prácticas corruptas en el uso del presupuesto público y en la gestión institucional, de resistir la evaluación de sus actividades y oponerse a las auditorías externas; de favorecer el “adoctrinamiento de izquierda”, politizando las aulas universitarias (Página/12, 5/04/2024), y de desarrollar investigaciones irrelevantes y de baja calidad científica. Retomó los cuestionamientos a la gratuidad centrados en la “inequidad” que beneficiaría a los sectores más ricos y a estudiantes extranjeros.

Desde su asunción, siendo minoría en el Congreso y sin ninguna gobernación provincial en manos del oficialismo, Milei ha implementado una estrategia de gobierno basada en tres herramientas: la emisión de Decretos de Necesidad y Urgencia y resoluciones ministeriales para reformar leyes, el ejercicio del poder de veto para quebrar los ocasionales triunfos legislativos de una oposición desarticulada, y la amenaza o eliminación/recorte de las transferencias de fondos nacionales a las jurisdicciones provinciales, amparado en la discrecionalidad que le otorga el funcionar con un presupuesto de la administración pública prorrogado en 2024 y 2025. Al no obtener la aprobación de la ley anual de presupuesto en el Congreso, la prórroga le permite un grado amplísimo de libertad para asignar, reasignar, congelar o actualizar partidas, incluyendo el presupuesto asignado a las Universidades Nacionales, tradicionalmente objeto de negociación entre el Gobierno Nacional y el organismo que representa a las Universidades Nacionales (Consejo Interuniversitario Nacional, CIN). Así, por ejemplo, en 2024 no se realizaron inversiones de infraestructura (gastos de capital); entre 2024, el Programa “Desarrollo de la educación superior”, que representa el presupuesto

⁴ El Ministerio de Educación fue rebajado al nivel de Secretaría dentro de un mega Ministerio de Capital Humano, que subsume las previas carteras de Educación, Trabajo y Desarrollo Social. Está a cargo del Carlos Torrendel, vinculado a la educación privada católica y defensor de la subsidiariedad del estado. En la Subsecretaría de Políticas Universitarias, antes Secretaría, se nombró a Alejandro Álvarez, vinculado al peronismo de derecha. Inmediatamente de asumir el Gobierno eliminó el FONID (Fondo de Compensación Salarial Docente) que desde 1999 complementaba los salarios de los docentes provinciales, y por un Decreto de Necesidad y Urgencia, pretendió recortar el derecho de huelga declarando a la educación “servicio esencial”. Suspendió, subejecutó o eliminó programas socio-educativos, de educación sexual integral, de apoyo a los comedores escolares, de formación docente continua, de inversión en infraestructura escolar, entre otros. Al mismo tiempo, lanzó un programa dirigido a familias con hijos asistiendo a escuelas privadas con dificultades para pagar los aranceles en el marco del impacto de la devaluación de diciembre de 2023; este programa continúa hasta hoy.

anual asignado a las Universidades Nacionales para financiar gastos corrientes, disminuyó 30% respecto de 2023; el presupuesto asignado en 2025 sólo se incrementó 2% respecto del 2024 (Curcio *et al.*, 2024). A lo largo de casi dos años de gestión, los programas especiales preexistentes han sido objeto de subejecuciones, recortes o han sido directamente discontinuados. El presupuesto universitario cayó en 2024 al 0,57% del PBI, y se estima que el presupuesto prorrogado para 2025 representa sólo 0,51% (CONADU, junio 2025):

Gráfico 1 – Evolución del presupuesto universitario como % del PBI. 2015-2025



Fuente: IEC/CONADU (2025), sobre la base de datos proporcionados por el Ministerio de Economía⁵.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias inauguró una política de enfrentamiento con los rectores y las organizaciones sindicales. A julio de 2024, se calculaba que los salarios docentes de las Universidades Nacionales perdió algo más de 30% de su poder adquisitivo en los dos primeros meses del gobierno de J. Milei; los magros incrementos posteriores, otorgados de manera unilateral por fuera de la paritaria, no modificaron sustancialmente la pérdida. La brecha respecto de la inflación es mucho mayor que la de otros sectores (trabajadores del sector público, del sector privado registrado y no registrado):

⁵ Disponible en: <https://iec.conadu.org.ar/wp-content/uploads/2025/06/2025-Presupuesto-y-Financiamiento-de-las-Universidades-Nacionales.pdf>.

Gráfico 2 – Evolución del poder adquisitivo del salario universitario respecto de Noviembre 2023. En %⁶Fuente: Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (2025)⁷.

Un informe reciente calculaba que los salarios de los docentes universitarios argentinos eran los más bajos respecto de 11 países de América Latina.⁸

En el Congreso Nacional, los partidos de la oposición (diferentes fracciones de los frentes electorales en disolución y partidos de izquierda) lograron sancionar en 2024 una primera Ley de Financiamiento Universitario (Ley N° 27.757/24) pero fue vetada por el PEN (Decreto 879/24); vuelta al Congreso para su ratificación, la ley no logró los dos tercios de los votos necesarios en la Cámara de Diputados para revertir el veto.⁹ En 2025, se presentó una segunda propuesta de ley en el Parlamento y fue aprobada en la Cámara de Diputados en agosto, y nuevamente el presidente Milei la vetó, lo que derivó en un incremento de la conflictividad tanto en las Universidades como en las calles de Argentina durante el mes de septiembre. Al momento de la realización de este artículo (fines de septiembre de 2025) la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial quedando pendiente el tratamiento en Senadores, pero con la perspectiva de que finalmente sea aprobada la Ley.

Respecto del recorte y ajuste del presupuesto referido al sistema científico-tecnológico, que incluye tanto al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) como a otros 19 organismos conocidos bajo las siglas de "OCT" – entre los que se destacan el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de

⁶ Calculado sobre la base del salario básico del Ayudante de Primera sin título de posgrado. Para una fundamentación metodológica, ver. <https://docs.google.com/document/d/1x3h-pfg7XYDclfAei5wCveQZzyaw1EXxDqTOPCj9xJ8/edit?tab=t.0>.

⁷ Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/13MDANCxF0cw4CJ4LQwAkaeRowDQRsMxR/view>.

⁸ Calculado sobre la base de salario un profesor titular con dedicación exclusiva sin antigüedad, estimado en u\$s, el salario era la mitad del que recibía un profesor en Chile, un tercio de un profesor en Uruguay, y un quinto de Brasil.

⁹ La ley determinaba la actualización del presupuesto universitario inicial 2024 prorrogado de 2023 a partir de la variación anual de IPC/INDEC 2023 y 2024. Dicha actualización debía incluir la recomposición salarial del personal docente y no docente universitario en ese período, encomendando al PEN la actualización mensual posterior por índice de inflación. Establecía "la ampliación anual y progresiva del monto y número de beneficiarios de becas estudiantiles, y finalmente indicaba a la AGN realizar las auditorías establecidas por la LES y enviar los informes al Congreso.

Actividades Espaciales (CONEA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONAE), el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Servicio Meteorológico Nacional –, se estima que ha provocado la mayor caída en la historia: en 2024 fue de 32,9% en términos reales contra 2023 (Ocvirk, 2025, p. 6).

Como han denunciado desde el gremio ATE-CONICET de Capital Federal, el organismo “está atravesando un acelerado proceso de vaciamiento” que se manifiesta, además, en la pérdida de puestos de trabajo; desde la asunción de Milei se ha expulsado a más de 1.500 trabajadores/as, a lo que se suma la disminución general de más de un tercio del poder adquisitivo de los salarios, la reducción de becas, el congelamiento del ingreso a carrera de investigadores/as y el desfinanciamiento o bloqueo de fondos destinados a proyectos de ciencia y tecnología (ATE-CONICET, 2025). A tono con una de las matrices discursivas de las ultraderechas globales, Milei y sus principales voceros denostan públicamente a la comunidad científica y en particular a quienes son investigadores/as de CONICET (con un ensañamiento contra de las Ciencias Sociales), clasificándolos como una minoría “privilegiada” que forma parte de la “casta”. Incluso ha llegado a expresar, desde antes de asumir como presidente, la intención de privatizar o dejar en manos del sector empresarial la gestión del organismo (Infobae, 16/08/2023).

Las luchas contra el desfinanciamiento

La llegada al gobierno de Milei implicó el inicio de una alta conflictividad con el sector universitario. La primera etapa del conflicto estuvo signada por la criminalización de la protesta, el ataque a los derechos de las y los trabajadores a la libertad y democracia sindical, así como políticas de desregulación económica, una fuerte devaluación, el aumento del 120% de los precios y el congelamiento de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. En los primeros días se demostró que el “discurso de la motosierra” implicó un empeoramiento de las condiciones de vida de buena parte de la clase trabajadora. Las principales centrales obreras rechazaron los operativos represivos de la protesta social por medio del llamado “protocolo anti-piquetes” y denunciaron frente a la OIT las persecuciones contra las organizaciones sindicales (Clarín, 19/12/2023). El gobierno pretendió que las entidades gremiales y los movimientos sociales movilizados financiaran los operativos represivos de las fuerzas de seguridad para desalentar la protesta; fue la antesala del primer paro general en el mes de enero de 2024. Hasta mayo de 2024, esta primera etapa de protesta estuvo marcada por la profundización del reclamo por paritarias y aumento presupuestario. En un contexto de inflación galopante y un presupuesto universitario congelado, se impulsó la articulación de los gremios y surgió el Frente de Sindicatos de Universidades Nacionales (FSUN), confluyendo sus acciones con los reclamos del CIN y el movimiento estudiantil.

El año lectivo se inició con medidas de fuerzas tanto de los niveles obligatorios del sistema educativo como en la universidad, con la novedad de la acción conjunta de las entidades aglutinadas en el Frente Sindical. El gobierno hizo oídos sordos a los reclamos sin abrir las paritarias, y otorgó aumentos insignificantes. La drástica caída del salario afectó profundamente a las obras sociales universitarias: el ahogo presupuestario sumado a la dolarización de los insumos médicos y de la industria farmacéutica, las llevó a una profunda crisis sin horizonte de superación.

Se gestó así la primera Marcha Federal Universitaria el 23 de abril de 2024 (Infobae, 23/04/2024). En el marco de un paro del Frente y la declaración de emergencia presupuestaria del CIN, amplios sectores universitarios y de la sociedad toda confluyeron en una primera gran manifestación de protesta contra el gobierno de Milei, en defensa de la universidad pública. Se estima que se sumaron a ella entre 500.000 a 800.000 personas, llegando a 1 millón en todo el país. Desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, la marcha desbordó el operativo “anti-piquetes”. Como respuesta, el gobierno inició una campaña de desprestigio estimulando a denunciar a las y los docentes por “adoctrinamiento”.

Después de la primera gran movilización universitaria y tras nuevos paros del Frente Sindical, el gobierno decidió un aumento de la partida de funcionamiento de la UBA del 270% y un aumento para los hospitales de esa universidad del 300% (Página 12, 16/05/2024). Podría pensarse que fue un aumento significativo; pero, teniendo en cuenta que la partida universitaria 2024 estaba prorrogada de 2023 sin actualización y que la inflación acumulada fue de más de 430% (aplicando el cálculo compuesto que corresponde a aumentos sucesivos del 211% de 2023 y 70% a mayo de 2024), la recomposición de 270% y 300% no alcanzó para cubrir los gastos de funcionamiento. Por otra parte, aumentar la partida presupuestaria de funcionamiento de solo una universidad – aunque fuera la más importante del país –, fue leído como una medida para desarmar la articulación del movimiento y una clara provocación inaceptable. Ante la agudización de la protesta, se anunció un aumento de 270% para gastos de funcionamiento del resto de las universidades (10% del presupuesto universitario); los salarios siguieron totalmente licuados por la inflación. El incremento fue leído como una victoria frente al gobierno; pero, en lugar de empoderar la lucha, inclinó a algunos sectores de las máximas autoridades universitarias a desalentar la acción directa. Con el cierre de esta primera etapa del conflicto universitario comienza una de repliegue del movimiento.

A pesar de ello, las protestas sociales seguían teniendo eco entre los sectores movilizadores más críticos. La lucha contra la “Ley Bases”, la desarticulación de las políticas de género, el reclamo por las y los detenidos durante las protestas, contra las represiones sufridas y el reclamo por la reincorporación de despedidos, fue una constante en los comunicados gremiales.

El segundo semestre de 2024 se inició nuevamente con medidas de fuerzas del Frente Sindical, abriendo una segunda etapa del conflicto, con el paro como principal medida y con consignas centradas en el salario. La primera propuesta de una Ley de Financiamiento Universitario, a fines de agosto de ese año, revitalizó la movilización. Con la Ley como horizonte se gestó una nueva Marcha Federal Universitaria para el 2 de octubre, convocada por el FSUN, el CIN y la FUA. Esta segunda marcha no fue tan masiva como la de abril, con un estimado de 270.000 personas y otras 450.000 en el interior del país (La Nación, 02/10/2024). Pero claramente fue una muestra contundente de la resistencia organizada contra la amenaza de veto, que no se hizo esperar.

Esto activó una tercera etapa del conflicto. Ahora, las medidas de fuerza se acompañaron con actividades de visibilización: marchas a nivel local, asambleas de estudiantes, docentes y no docentes, vigiliadas en las universidades y clases públicas en las calles y las plazas que apuntaron a sacar el conflicto de las aulas a las calles. En el momento más álgido se produjeron tomas de universidades por el movimiento estudiantil, llegando a contabilizarse 65 de ellas a lo largo del país (La Izquierda Diario, 10/10/2024). Las tomas, en

su mayoría contaron con el apoyo de la comunidad universitaria, aunque hubo casos en que las resistieron.

Los paros continuaron hasta fin de año, pero con medidas aisladas territorialmente; el 2025 se inició con acciones directamente descoordinadas. Ni desde el Frente Gremial, ni desde el CIN se impulsaron acciones de lucha para enfrentar el ajuste.

El año 2025 comenzó también con paros del Frente Sindical y una masiva Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista (El País, 01/02/2025) a la que adhirió el movimiento universitario. Se agudizaron los operativos represivos de la protesta, en especial contra las y los jubilados, que semanalmente se congregan frente al Congreso, lo que generó un fuerte repudio de las centrales obreras con paros y movilizaciones. Pero lo conseguido con las masivas movilizaciones en 2024 ya era papel mojado en febrero del año siguiente. Se impuso una lógica de respuestas individuales de las y los docentes: algunos compensaron sus magros salarios con nuevos trabajos; otros, renunciaron para trabajar en el sector privado. Así los salarios universitarios se convirtieron en el principal pivote en el que se sustenta el ajuste a la universidad.

Según el Becerra y Tomatis (2025) entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 el salario docente universitario – tomando como cargo testigo el de Jefe de Trabajos Prácticos con un cargo semi-exclusivo y 10 años de antigüedad – arrastra una pérdida equivalente a 4.5 salarios. Como se ha mostrado en el apartado anterior, el estancamiento de la inversión en el sistema universitario público afectó al salario docente, que sufrió una sostenida caída a lo largo de los últimos 10 años. Desde agosto de 2015, sus ingresos han atravesado etapas a la baja con solo una breve recomposición pos-pandemia, abarcando gobiernos de diferente signo político, hasta llegar al de Milei. Con su asunción el salario docente universitario muestra una baja de 24,4% en el primer año. Es decir que, en este período de 10 años hasta agosto de 2025 se acumula una pérdida 46,4% del salario real, y más aguda en las categorías más bajas. Teniendo en cuenta que en mayo la diferencia entre la inflación y la variación salarial fue de 86.76 puntos porcentuales, sería necesario un 42% de incremento para recuperar los niveles anteriores a la nueva gestión. El salario de las categorías iniciales – incluso con mucha antigüedad –, con carga horaria máxima de 40 horas semanales, según los datos del INDEC para mayo 2025, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

El salario es donde el gobierno realiza el ajuste, afectando a más del 85% del presupuesto universitario. Convirtiendo a la universidad en un espacio poco atractivo para el desarrollo profesional de las y los futuros graduados, así como para quienes se desempeñan en áreas solicitadas por el mercado laboral privado. Además de que se empuja a las y los trabajadores a aumentar sus ámbitos laborales para alcanzar un salario que cubra sus necesidades y las de sus familias.

La lucha por el salario y la nueva Ley de Financiamiento concentraron las consignas de la movilización universitaria, especialmente en la nueva Marcha Federal concretada en septiembre de 2025 frente al rechazo al veto presidencial. A diferencia del año anterior, después del primer rechazo del Congreso a un veto del presidente – a una ley que declara la emergencia en discapacidad – y la derrota electoral de La Libertad Avanza (en alianza con el PRO liderado por Mauricio Macri) en la Provincia de Buenos Aires, la oposición consiguió los votos necesarios para revertir los vetos presidenciales contra leyes que atendían la emergencia pediátrica del principal hospital pediátrico nacional el Garrahan y el financiamiento

de las universidades nacionales. Ese día se concentró una importante movilización frente al Congreso, de universitarios y trabajadores de la salud, con lo cual se dio el primer paso para revertir el ajuste.

Conclusiones

El artículo realiza un análisis de coyuntura de la política universitaria y de ciencia y tecnología del gobierno de Milei en Argentina, en el marco de la “oleada global” de auge de las ultraderechas, entendida como un proyecto de restauración del poder de clase que busca superar la crisis orgánica vivida en la región y a nivel mundial. Se sintetizan ciertas condiciones generales que pavimentaron el crecimiento y triunfo de La Libertad Avanza, y el plan de ajuste estructural y desfinanciamiento del sistema universitario y científico nacional, señalando sus consecuencias a la fecha. Se reconstruyen sintéticamente las diferentes luchas y resistencias libradas por los gremios docentes y estudiantiles y otros actores relevantes, a lo largo de casi dos años de gestión gubernamental, ponderando los alcances y limitaciones de estas disputas.

Nuestro enfoque general buscó incorporar en el análisis tanto de las relaciones de fuerzas como de la confrontación política, económica y sociocultural que todavía está en curso – y que precisamente las ultraderechas buscan cerrar de forma virulenta – no solo a los procesos de protesta que tuvieron impacto en el poder gubernamental, sino a todas las experiencias políticas de la región, y en particular de Argentina, que se enmarcaron en – y aún hoy apuntalan – resistencias y luchas dentro del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina, aunque sin un saldo electoral positivo.

Consideramos que el triunfo arrollador de Milei amerita un análisis crítico de las tendencias estructurales y las dinámicas de continuidad que han implicado procesos paralelos de vulneración de derechos, precariedades múltiples y modalidades de exclusión – o bien de inclusión subalternizada – y que, en tanto condiciones materiales de existencia enlazadas orgánicamente con un patrón neoliberal no cuestionado de raíz, es preciso ponderar al momento de comprender las causas que han alimentado el crecimiento y capilaridad de ciertos valores, imaginarios y prácticas cotidianas que conectan con los idearios de la ultraderecha en Argentina.

El objetivo prioritario del proyecto encabezado por Milei es, a través de iniciativas como la analizada a lo largo de nuestro artículo, superar esta situación de inestabilidad hegemónica, mediante un ajuste estructural que desplace la correlación de fuerzas en favor del capital y genere nuevas condiciones duraderas para la explotación y dominación de clase, en sintonía con un cambio de época regional y global en el que las ultraderechas parecen liderar este proceso de contraofensiva conservadora.

Sin embargo, una primera cuestión que resulta relevante destacar es que la sorpresiva llegada de Milei al gobierno no es fruto de una derrota inapelable del campo popular y allí reside una diferencia fundamental con relación al ciclo menemista de los años 90 en Argentina. Más allá de la disparidad de motivos y factores que incidieron para garantizar su triunfo electoral, el caudal de votos obtenidos no parece responder mayoritariamente a un “cheque en blanco” en favor de la implementación de un plan coherente de extrema neoliberalización y desfinanciamiento, sino a un hastío generalizado que supo ser canalizado

por una figura ajena al quehacer político tradicional, que conectó con ciertos malestares y deseos de cambio de un sector importante de la ciudadanía.

Sería un error considerar al gobierno de Milei como fuerte y estable. Por el contrario, signado por una crisis aguda tanto en términos socioeconómicos como en el plano de la representación política que aún no ha logrado suturar, la utilización creciente de la coerción evidencia, al decir de Gramsci (1999), que estamos en presencia de un Estado débil en términos hegemónicos. A tono con la tendencia continental y global, la apelación a la coerción no ha dejado de ser el eje vertebrador del discurso punitivista en auge, desde la construcción de un “enemigo interno” que legitime la escalada represiva, buscando interpelar al imaginario social autoritario, y orientando ciertos temores o miedos e impotencias, para conectarlos con una necesidad de protección y resguardo, de respeto de la ley y deseo de restablecimiento del “orden”, que el sentido común dominante exige de parte del Estado, aunque éste opere bajo lógicas que tienden a vulnerar las garantías básicas del régimen democrático liberal.

Como vimos, lo que se busca es restaurar un poder de clase (así como heteropatriarcal) y desarticular aquellas conquistas parciales que se han plasmado en políticas públicas redistributivas o de carácter gratuito (no exentas, aun así, de ambigüedades y limitaciones) y en un conjunto de derechos logrados por parte de la clase trabajadora y el pueblo en general a lo largo de décadas de disputa.

Frente a un panorama que parece estar signado por el pesimismo de la inteligencia, redoblar la apuesta por la defensa y democratización de lo público desde el optimismo de la voluntad, en particular por instituciones como las universidades y el complejo científico-tecnológico que se encuentra en pie de lucha, constituye una actitud ética y política impostergable. En el caso específico de Argentina, la valoración altamente positiva que tienen estos espacios y ámbitos en gran parte de la sociedad, ya sea por su carácter gratuito, su considerable masividad, el representar aún hoy un símbolo de ascenso social para un sector importante de los sectores populares, o por la capilaridad y vínculo estrecho que mantienen con – y aportan a – diversos territorios, proyectos y comunidades, es un aliciente para pensar que la batalla que se viene librando contra su desfinanciamiento y desprestigio, puede fungir de “centro de anudamiento” de las resistencias y disputas que enfrentan la embestida ultraliberal, represiva y privatista del gobierno de Milei.

Si bien al momento del cierre de este artículo no se ha resuelto el conflicto en torno al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario de cara al año 2026, un escenario probable es que se termine ratificando en ambas Cámaras legislativas, lo cual equivale a su aprobación definitiva, hecho que redundaría, por tanto, en una derrota importante tanto del veto presidencial como de la propuesta inicial de ajuste y “déficit cero” impulsada por La Libertad Avanza. Reinstalar en la agenda pública la discusión acerca de la relevancia de este tipo de financiamiento, de manera tal que se logre en simultáneo trascender la sectorialidad y no sólo exigir que se atiendan las genuinas demandas de la comunidad educativa, sería un paso adelante en el horizonte de aportar a una propuesta integral de transformación y alternativa profunda tanto del Estado como de la propia sociedad, que permita articular y hacer confluir cada una de las luchas que se desenvuelven de manera dramática por estos días en las calles de Argentina.

Referencias

ATE-CONICET. **Una bomba de tiempo en CONICET**. Documento de ATE-CONICET Capital Federal, Buenos Aires, 2025.

BECERRA, E.; TOMATIS, K. **Informe 31**. Evolución salario docente 2024. Elementos para entender la dinámica del salario docente. Marzo 2025. Córdoba, Argentina: Observatorio de Salario y Presupuesto Universitario, ADIUC, 2025. Disponible en: <https://adiuc.org.ar/wp-content/uploads/2025/03/Informe-31-Evolucion-salario-docente-2024.pdf>. Consulta en: 27 julio 2025.

BROTO, A. Financiamiento y políticas públicas para las universidades nacionales en el período 2003-2011. In: SAN MARTÍN, R. (Ed.). **Financiamiento de la Universidad**. Aportes para el debate. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2012.

CETRÁNGOLO, O.; CURCIO, J. **El gasto de las universidades públicas nacionales**. Buenos Aires: CECE, 2017.

CONADU. **Presupuesto y Financiamiento de las Universidades Nacionales**. Buenos Aires, 2025.

CURCIO, J.; ALZÚ, M. S.; SÁENZ GUILLÉN, L. **Presupuesto educativo nacional 2025**. CABA: Presupuesto educativo nacional 2025, 2024.

FEIERSTEIN, D. **La construcción del enano fascista**. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2019.

FERNÁNDEZ LAMARRA, N. *et al.* (Ed.). **La educación superior universitaria argentina: situación actual en el contexto regional**. Tres de Febrero: UNTreF, 2018

FORTI, S. **Extrema derecha 2.0**. Madrid: Siglo XXI, 2021.

GARCÍA DE FANELLI, A. **La Reforma de la Educación Superior en la Argentina**: entre el Mercado, la Regulación Estatal y la lógica de las instituciones. Documento de Trabalho 6. Sao Paulo: NUPES - Universidade de Sao Paulo, 1997.

GARCÍA DE FANELLI, A.; BROTO, A. Financiamiento estatal y expansión de las universidades nacionales argentinas: dos décadas del siglo XXI. **Revista Argentina de Educación Superior**, v. XV, n. 27, p. 176-194, 2023.

GRAMSCI, A. **Cuadernos de la Cárcel**. Tomo 5. México: Editorial Era, 1999.

GUAMÁN, A. *et al.* (Dir.). **Neofascismo. La bestia neoliberal**. Madrid: Siglo XXI, 2019.

HARVEY, D. **Breve historia del neoliberalismo**. Buenos Aires: Akal, 2015.

IEC/CONADU. **Presupuesto y financiamiento de las Universidades Nacionales**. CABA: IEC - CONADU. junio 2025

LABORATORIO DEL SALARIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. **Informe sobre la evolución salarial, inflación y paritaria**. Junio/Julio. Argentina: Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria, 2025. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/13MDANCx_F0cw4CJ4LQwAkaeRowDQRsMxR/view. Consulta en: 27 julio 2025.

MELO, D. B. O bolsonarismo como fascismo do século XXI. In: REBUÁ, E.; COSTA, R.; GOMES, R.; CHABALGOITY, D. (Org.). **(Neo)fascismo e educação**: reflexões críticas sobre o avanço conservador no Brasil. Rio de Janeiro: Mórula, 2020.

MORDUCHOWICZ, A.; SÁENZ GUILLÉN, L.; VOLLMAN, V. **Evolución del financiamiento educativo**. CABA: Argentinos por la Educación, 2024. Disponible en: <https://argentinosporlaeducacion.org/wp-content/uploads/2024/09/Evolucion-del-financiamiento-educativo-1.pdf>. Consulta en: 27 julio 2025.

MUDDE, C. **La ultraderecha hoy**. Bogotá: Paidós, 2021.

OCVIRK, V. La ciencia bajo la motosierra. **Le Monde Diplomatique**, Edición 310, abril 2025.

OUIÑA, H.; THWAITES REY, M. (Ed.). **Estados en disputa**. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina. Buenos Aires: El Colectivo/CLACSO, 2019.

STANLEY, J. **Como funciona o fascismo**. Porto Alegre: L&PM Editores, 2018.

TRAVERSO, E. **Las nuevas caras de la derecha**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2018.

Hernán Ouíña es licenciado en Ciencia Política y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigador del CONICET con sede en el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado de diversas iniciativas de educación popular y coordina la Escuela de Formación Política Rosa Luxemburgo. Es Profesor titular de Sociología Política y de Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el Proyecto de Investigación UBACyT *Estado, nuevo municipalismo y política prefigurativa en América Latina* e integra el Grupo de Trabajo de CLACSO *El Estado como contradicción*, del que ha sido coordinador en dos ocasiones.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1087-5671>

E-mail: hernanou@yahoo.com.ar

Gabriela Vilariño es profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación, UNLu. Profesora Adjunta del Departamento de Educación, UNLu, en Teorías de la Educación I para Ciencias de la Educación y Teorías de la Educación y la Educación Física para el Profesorado de Educación Física. Dirige una investigación vinculada a educación y trabajo y es integrante de investigaciones en Brasil sobre trabajo docente; dirige el Grupo de Investigación en Educación Física Crítica; ha entregado el Trabajo Final de la Especialización en Ciencias Sociales con Mención en Historia Social de la UNLu. Ha sido autora, co-autora y organizadora de libros en Argentina, Brasil y Chile, relacionados a las asignaturas en las que trabaja y a investigaciones en las que ha participado sobre sindicalismo docente y extensión universitaria.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6565-1127>

E-mail: vilarinogabriela@gmail.com

Laura Rodríguez es profesora en Historia y Licenciada en Ciencias de la Educación. Magister en Política y Gestión de la Educación (UNLu). Doctora en Cs Sociales (UBA). Docente de grado y posgrado en el equipo de Política Educacional Argentina y Comparada, del

Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Investigadora en temas de política universitaria y, privatización educativa. Actualmente dirige el Proyecto de Investigación *La formación de la fuerza de trabajo y la educación superior en el GBA: tendencias y políticas (2001-2019)* (UNLu). Participante del grupo latinoamericano de investigadores del Grupo de Pesquisa *Relações entre o Público e o Privado em Educação* (GPRPPE/UFRGS).
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5492-4514>
E-mail: laura.rodriguez57@gmail.com

Recibido el 12 de agosto de 2025

Aprobado el 28 de septiembre de 2025

Editora a cargo: Theresa Adrião

